



ESPAÑA GASTARÁ EN 2030 MÁS EN PAGAR LOS INTERESES DE LA DEUDA QUE EN HOSPITALES

El fin de la era de la financiación barata disparará un 50% la partida destinada a financiar el pasivo de las administraciones públicas en los próximos cinco años, según Funcas, y obligará a destinar 60.000 millones de euros a este concepto

Bruno Pérez
Madrid



España va a empezar a pagar más por su deuda de manera inminente y lo va a hacer a unas magnitudes que harán que en los próximos años tenga que destinar más recursos presupuestarios públicos a cumplir con sus acreedores que a mantener operativa la red de hospitales del país. Una estimación difundida ayer por Funcas, el prestigioso ‘think tank’ de la fundación de las cajas de ahorros, concluye que bajo las nuevas condiciones hacia las que oscila el mercado el gasto por intereses que tendrá que atender el Tesoro Español se disparará más de un 50%, desde los 40.300 millones de euros que supuso en 2025 hasta más de 60.000 millones que supondrá en 2030.

La magnitud de la escalada del gasto en intereses se aprecia de manera muy evidente si se observa el ‘sorpasso’ que significará sobre un capítulo tan crítico del gasto público como el coste de los servicios hospitalarios. Según la información oficial de distribución del gasto público por funciones del Ministerio de Hacienda, en 2024 –último dato disponible– el gasto en servicios hospitalarios de las administraciones públicas ascendió a 43.650 millones, tras incrementarse un 20% tras la pandemia.

De evolucionar en los próximos años al ritmo acelerado que prevé la Airef, de alrededor de un 4,5% al año como consecuencia de la mayor demanda de servicios sanitarios por el envejecimiento de la población, a la altura de 2030 el coste para las admi-

nistraciones públicas de la red hospitalaria nacional alcanzaría los 56.843 millones, una cifra inferior sin embargo a los 60.600 millones que Funcas entiende que las arcas públicas tendrán que abonar en intereses de la deuda en ese año.

Otras cifras ilustran la magnitud de lo que va a ocurrir con los intereses en España y el coste de oportunidad que va a suponer. Esos 20.000 millones más que España va a pagar por su deuda de aquí a 2030 equivale al gasto anual en personal de la Administración del Estado o a una nómina mensual de las pensiones, y supera con mucho el gasto en inversión productiva que se necesitaría para equiparar el esfuerzo inversor de España al de los países más punteros de su entorno.

La Airef ya advirtió en su día de los riesgos que se escondían tras el remoloneo del Gobierno a la hora de reducir la deuda en un contexto de elevados ingresos fiscales, principalmente al detraer recursos presupuestarios para otras políticas en un contexto de incremento exponencial del gasto en pensiones, de mayor demanda de servicios sanitarios y sociales y de presión internacional para incrementar el gasto en defensa.

Funcas subraya este flanco. «Lo que está en juego es un cambio de paradigma de la política macroeconómica, por el estrechamiento de margen de maniobra de los Estados, una situación que, además, coincide con necesidades crecientes de inversión y de respuesta a todo tipo de ‘shocks’», advierte la nota, que recurre al ejemplo de Francia para recordar «el coste que supone posponer los dilemas».

Si hay una recomendación de política económica que se ha formulado al Gobierno de España en los últimos años y que ha sido sistemáticamente ignorada ha sido la de acelerar la reducción de la deuda pública. La pandemia disparó el endeudamiento público hasta el techo histórico del 120% del PIB, un nivel que no se veía desde que el Tesoro español tuvo que sufragar los dispendios por las guerras de Cuba y Filipinas, y con este la inquietud de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la Comisión Europea, el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional sobre el flanco de vulnerabilidad que semejante volumen de deuda suponía para el Reino de España.

El efecto de la inflación

No ayudó a calmar esa inquietud la acusada inclinación al gasto público del gobierno de coalición de las izquierdas presidido por Pedro Sánchez, que pese a disfrutar del mayor caudal de ingresos fiscales de la historia de España ha tendido a arrastrar los pies a la hora de reducir la deuda pública,



El vicepresidente primero, Carlos Cuervo, entre los ministros de Cultura y de Sanidad. Jaime García

que aún hoy se sitúa por encima de los niveles en que estaba en 2019.

El robusto crecimiento económico de los últimos años, alimentado además por una inflación que ha contribuido a reducir la ratio de deuda sobre PIB pese al incremento del gasto público, y los problemas de endeudamiento de otros pares como Francia o Italia han servido durante estos años



de coartada para un Gobierno que ha presumido de reducir el endeudamiento sin necesidad de ajustes ni recortes. Pero la era de financiación barata, gracias a unos tipos de interés históricamente bajos y a una situación económica relativa mejor que otras grandes economías del euro, de la que se ha beneficiado el Tesoro Español hasta ahora parece tocar a su fin y el panorama que se perfila hacia adelante empieza a ser inquietante.

La estimación de Funcas parte de

la premisa de que este encarecimiento de la deuda es estructural y que no responde solo al actual episodio de inflación, y a la subida transitoria de los tipos de interés que puede acarrear, sino a otras corrientes más de fondo como la desconfianza de los inversores ante las dificultades de los países para poner sus cuentas en orden, con otros factores rondando como la saturación de los mercados de deuda por las necesidades de financiación del despliegue de la IA.